



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

PROPUESTA DE LA APC PARA EL ESTATUTO DEL COOPERANTE:

DEFINICIÓN DE LA CONDICIÓN DE COOPERANTE:

Un o una Cooperante es una persona física, profesional de la cooperación, trabajador contratado laboralmente o en prestación de servicios, por cuenta de Organizaciones Internacionales o de Instituciones u Organismos Públicos o Privados españoles o de un país desarrollado o receptor de ayuda, para realizar actividades de Ayuda Humanitaria o de Cooperación al Desarrollo en países receptores de ayuda, lo que le obliga a residir, temporalmente, en dichos países.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Entidades públicas o privadas españolas que desarrollan actividades de cooperación al desarrollo o de ayuda humanitaria en el extranjero, Cooperantes españoles o extranjeros con residencia legal en España, independientemente de por quién sean contratados, y Cooperantes ciudadanos de cualquiera de los 25 países de la Unión Europea, o extracomunitarios contratados por las citadas entidades públicas o privadas españolas para trabajar en países receptores de ayuda fuera de su país de origen.

DERECHOS Y DEBERES DEL COOPERANTE:

Derechos:

1. A la tutela efectiva de la presente ley reguladora del Estatuto del Cooperante, en todos sus ámbitos, especialmente, cuando el Cooperante o la Cooperante se encuentre residiendo en el extranjero.
2. A la protección consular de la Representación Diplomática u Oficina Consular que represente a España en la región o país donde resida el Cooperante o la Cooperante.
3. A la negociación colectiva de las condiciones laborales y salariales con sus entidades empleadoras.
4. A un contrato con todas las garantías que el ordenamiento jurídico español establece para sus ciudadanos y ciudadanas.
5. A un salario justo acorde con las características profesionales y personales del Cooperante o de la Cooperante, y con el puesto y el entorno donde desempeñe sus funciones, así como a su percepción puntual e íntegra. El salario podrá percibirse íntegramente en España, o íntegramente en el país de destino o parcialmente en uno y otro, si así lo solicitara el Cooperante o la Cooperante.



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

6. Al abono íntegro y no sujeto a declaración fiscal de los siguientes gastos causados por el desempeño de sus funciones en el extranjero:

a) Los gastos de viaje de expatriación y repatriación para el Cooperante o la Cooperante, en cualquier circunstancia, y para su cónyuge y dependientes, en contratos superiores a seis meses.

b) Los gastos de transporte, de expatriación y repatriación, ocasionados por el traslado de los enseres personales del Cooperante o de la Cooperante, en contratos iguales o superiores a un año.

c) Los gastos de un viaje anual a España para el disfrute de vacaciones tanto del Cooperante o de la Cooperante como del cónyuge y dependientes que con él o ella convivan en el país de destino.

7. A un período mínimo de vacaciones anuales igual al establecido en el ordenamiento jurídico español para el resto de los trabajadores y trabajadoras, al que se le descontará los días de viaje y se le agregará un mínimo de quince días naturales.

8. A un tratamiento fiscal apropiado, justo y equitativo que reconozca la naturaleza de sus actividades, su condición de no residente y la merma de servicios y prestaciones que el Estado Español, por vivir en el extranjero, no puede darle.

9. A las prerrogativas y exoneraciones que, con carácter general, el Gobierno de España acuerde para ellos y ellas con los países receptores de ayuda, en los Acuerdos de Amistad y Cooperación o en las Comisiones Mixtas, al objeto de facilitar la labor de los Cooperantes y de las Cooperantes. En ausencia de convenios propios entre la entidad contratante y las autoridades locales de los países receptores de ayuda, cuando el Cooperante o la Cooperante sean contratados con cargo a subvenciones o fondos de ayudas o donaciones gratuitas no retornables de origen español, la Embajada de España en el país receptor lo acreditará ante las autoridades locales como cooperante oficial a fin de regularizar su estatus migratorio y facilitar su labor.

10. A la protección efectiva, en el país de destino, de la salud del Cooperante o de la Cooperante, de su cónyuge y dependientes y a la repatriación a España de los mismos tanto en caso de enfermedad o accidente grave que lo amerite, como en caso de fallecimiento.

11. A bolsas de estudios y becas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para los hijos e hijas de los Cooperantes o de las Cooperantes que cursen estudios en centros educativos en el exterior.

12. A participar en actividades de formación y perfeccionamiento que programen y desarrollen las Administraciones Públicas e instituciones privadas especializadas, debidamente reconocidas o autorizadas para tal fin, siempre y cuando no se perjudique el cumplimiento de las obligaciones contractuales.



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

13. A obtener de la entidad contratante, al finalizar el contrato, una certificación acreditativa de las funciones desempeñadas y su duración. Dicha certificación habrá de inscribirse en un registro abierto a tal efecto en la Agencia Española de Cooperación Internacional.

14. A un procedimiento especial, a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de reinserción personal y profesional del Cooperante o de la Cooperante en España, tras la finalización de sus servicios profesionales en el exterior, donde se incluya subsidio de desempleo, programas de formación y reciclaje profesional, programas sociales y programas de empleo. Las distintas Administraciones del Estado deberán considerar, como mérito, las actividades de cooperación y de ayuda humanitaria realizadas por el Cooperante o la Cooperante en las convocatorias de puestos al servicio de las Administraciones Públicas y en el acceso a viviendas de protección oficial.

Deberes:

1. De cumplir con las obligaciones laborales estipuladas en su contrato y con las órdenes e instrucciones de su empleador en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
2. De evitar la realización de actos que pudieran repercutir negativamente en el buen desarrollo de la actividad para la que ha sido contratado, así como en el prestigio de la entidad contratante o de la Cooperación Española en general.
3. De mantener la confidencialidad respecto de las materias que expresamente le sean comunicadas como reservadas por la entidad contratante.
4. De respetar las leyes, instituciones, autoridades, costumbres y usos sociales del país receptor, siempre y cuando no obliguen al Cooperante o a la Cooperante a incurrir en conductas que entrañen conculcación de derechos humanos.
5. De respetar el Código Deontológico correspondiente, que se desarrollará en el marco de esta Ley y de la Ley de Cooperación por la Asociación Profesional de Cooperantes.

CONTRATO

1. La relación jurídica que se establezca entre el Cooperante o la Cooperante y la entidad de cooperación se formalizará por escrito mediante una modalidad contractual cuyo contenido se regirá, además de las previsiones de la presente Ley, por lo establecido en los Textos Refundidos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En dicho contrato deberán constar, al menos, las siguientes menciones:

- a) Identificación de las partes.
- b) Lugar de trabajo.



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

- c) Duración del contrato.
 - d) Jornada de trabajo, calendario de festividades que regirá, permisos y vacaciones anuales.
 - e) Descripción de las funciones a realizar por el Cooperante o la Cooperante.
 - f) Remuneración con indicación de las indemnizaciones suplementarias a percibir y gajes a disfrutar en atención a las condiciones especiales de trabajo, la situación familiar y los gastos extraordinarios en que incurra el Cooperante o la Cooperante en su lugar de destino, así como la domiciliación y la divisa en que se efectuará el abono de dicha remuneración.
 - g) Disposiciones especiales para el caso de terminación anticipada de la relación contractual.
 - h) Otros pactos libremente acordados entre las partes que podrán incluir el cambio de lugar de trabajo y la modificación de las funciones asignadas al Cooperante o a la Cooperante cuando, por razones de urgencia humanitaria, así se requiera. En el caso de que se produzca esta modificación de la finalidad principal del contrato deberá ser comunicada por escrito al Cooperante o a la Cooperante, con aceptación firmada de éste o ésta, y registrada ante los servicios competentes del Ministerio de Trabajo. Asimismo, la entidad contratante indemnizará al Cooperante o a la Cooperante por todos los gastos suplementarios en que éste incurra a raíz de dicho traslado o cambio de funciones.
2. El envío al extranjero de Cooperantes por entidades españolas sin el debido contrato y las necesarias garantías establecidas por la presente Ley y la Ley del Estatuto de los Trabajadores será sancionado conforme a lo establecido en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Las organizaciones públicas y privadas españolas que quieran contratar una persona nacional de cualquiera de los 25 países de la Unión Europea, o una persona extracomunitaria con permiso de trabajo, para desarrollar tareas propias de la cooperación al desarrollo en el extranjero, deberán hacerlo bajo la legislación española, aunque la contratación se realice en los países receptores de ayuda.
3. El Gobierno garantizará, en aquellas intervenciones de ayuda humanitaria o de cooperación al desarrollo que lo requieran, subvencionadas total o parcialmente con cargo a los recursos del Estado, el pago de todos los costes de asistencia técnica implicados en la contratación del Cooperante o de la Cooperante, tales como salarios, seguridad social, viajes aéreos, traslados de enseres personales, seguros de asistencia sanitaria y de vida, y dietas.
4. El programa de subvenciones a ONGD para acciones en el campo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo o de la Ayuda Humanitaria deberá contar con un fondo especial para reintegrar el 50% del valor de todos los contratos laborales suscritos con cooperantes, debidamente registrados ante los servicios competentes del Ministerio de



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

Trabajo, realizados por entidades contratantes en intervenciones de ayuda humanitaria o de cooperación al desarrollo no subvencionadas total o parcialmente con cargo a los recursos del Estado.

5. Todo contrato suscrito con un Cooperante o una Cooperante en países receptores de ayuda por las entidades contratantes o por sus contrapartes locales en intervenciones de ayuda humanitaria o cooperación al desarrollo financiadas con fondos españoles, deberá respetar la legislación laboral local y su legislación migratoria, debiendo contar, la persona contratada, con los oportunos permisos de trabajo y de residencia temporal en el país. Dicho o dicha Cooperante no podrá acogerse a las prerrogativas y exoneraciones propias del personal expatriado a fin de no competir, de forma desleal, con otros españoles residentes en el país o con los propios ciudadanos de dicho país. El incumplimiento de la legislación local aplicable podrá acarrear la devolución, si se tuviere, de la subvención recibida con cargo a los recursos del Estado y la aplicación de sanciones a la entidad española implicada.

SEGURIDAD SOCIAL

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, conforme al Artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social, creará el Régimen Especial de Cooperantes como una acción protectora que cubra las contingencias y conceda las prestaciones adecuadas a las características específicas de su trabajo:

a) Dicho Régimen Especial de la Seguridad Social incluirá a todos los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia o trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, contratados por entidades contratantes públicas o privadas españolas, que presten sus servicios en el ámbito de la cooperación al desarrollo o de la ayuda humanitaria en países receptores de ayuda.

b) Las entidades españolas contratantes de Cooperantes con actividades o fines relacionados con la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria deberán registrarse en el Régimen Especial de Cooperantes.

c) La cotización a este Régimen Especial comprenderá tanto las aportaciones de la empresa como la de los trabajadores y trabajadoras quedando las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a cargo, exclusivamente, de las entidades contratantes.

d) Los grupos y bases de cotización serán establecidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales previa consulta con las entidades contratantes, las organizaciones sindicales y la asociación o asociaciones profesionales de Cooperantes.

e) Las prestaciones serán, subsidiariamente, las mismas que en el Régimen General con las particularidades que, a continuación, se señalan, y el cálculo de las bases reguladoras de dichas prestaciones económicas se hará sobre la totalidad de la base de cotización, sin aplicación de coeficientes correctores:



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

I. La asistencia sanitaria beneficiará a los Cooperantes y a las Cooperantes, cónyuges, hijos y dependientes y, cuando se encuentren en territorio español, correrá a cargo del INSALUD en las Comunidades Autónomas en que no ha sido transferida esta competencia, siendo la misma coordinada y complementada con la del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) o Servicio de Salud de Comunidades Autónomas y por la asistencia concertada. En las Comunidades Autónomas con asistencia sanitaria transferida, ésta correrá a cargo de las mismas.

Las instituciones de asistencia sanitaria, el INSALUD y los entes de salud pública de las Comunidades Autónomas, con asistencia sanitaria transferida, habilitarán mecanismos para la concertación desde el extranjero de citas médicas de atención a los Cooperantes y a las Cooperantes con un sistema de prioridad para que puedan ser atendidos durante sus reducidas estancias temporales en España.

Cuando se encuentren en el extranjero, la asistencia médica a los Cooperantes y a las Cooperantes, cónyuges, hijos y dependientes correrá a cargo de las entidades contratantes, las cuales se obligan a contratar, concertadamente entre sí y con la Agencia Española de Cooperación Internacional, con una compañía de reconocida solvencia, un seguro médico internacional de enfermedad y accidentes que cubra todos los gastos de asistencia sanitaria y farmacéutica, así como los de repatriación del enfermo o de la enferma a España, cuando lo amerite. Adicionalmente, las entidades contratantes contratarán, en las mismas condiciones que en el supuesto anterior, un seguro de vida que, además de los supuestos básicos incluya defunciones ocasionadas por motines, terrorismo y actos de guerra, así como la repatriación del fallecido o de la fallecida a España. Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia podrán suscribir y acogerse a las condiciones estipuladas en los citados seguros concertados.

La Administración establecerá los mecanismos adecuados para reintegrar a las entidades contratantes y a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia la totalidad de los gastos ocasionados por la contratación de los seguros anteriores.

II. Todos los Cooperantes y las Cooperantes incluidos en el Régimen Especial tendrán cubierta la Incapacidad Temporal, tanto si deriva de contingencias comunes como profesionales. La prestación se reconocerá en los mismos términos que en el Régimen General, pudiendo delegarse el pago del subsidio a las entidades contratantes. El derecho a esta prestación nacerá con la certificación de baja laboral que será otorgada, cuando se encuentre en el extranjero, por el médico autorizado por la compañía aseguradora contratada.

A todos los efectos, se consideran enfermedades profesionales, además de las adquiridas por el desempeño de sus actividades como Cooperantes, las enfermedades tropicales, exóticas o endémicas contraídas en los países receptores de ayuda. Asimismo, cuando se encuentre en el extranjero, se considerarán accidentes de trabajo, además de los producidos durante el desempeño de las actividades propias a su puesto de trabajo, los producidos, en cualquier momento, por seísmos, tormentas tropicales y huracanes, actividad volcánica, asaltos, actos de terrorismo o por armas de guerra o acciones bélicas.



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

La duración de la prestación por incapacidad temporal será la misma que en el Régimen General aunque cuando, continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del interesado o interesada hiciere aconsejable demorar la calificación, ésta podrá retrasarse por el período preciso que, en ningún caso, podrá rebasar los 30 meses.

III. La prestación por riesgos durante el embarazo y maternidad se dará a las Cooperantes en las siguientes condiciones:

i) Su duración será de 24 semanas, con carácter general, ampliable a 32 semanas cuando las condiciones sanitarias de la región o del país receptor de la ayuda lo aconsejen, en cuyo caso se deberá proceder a la repatriación fuera de la zona de la Cooperante embarazada. Dicho periodo se distribuirá a opción de la interesada, siempre que doce semanas sean posteriores al parto, cuando el permiso llegue al máximo de 32 semanas pudiendo descender, proporcionalmente, hasta 9 semanas cuando el permiso sea de 24 semanas. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de las semanas de descanso mínimas permitidas, posteriores al parto. Por encima de las semanas mínimas permitidas, posteriores al parto, también el padre podrá disfrutar de hasta seis de las últimas semanas de descanso, en caso de que la madre haya ejercitado el derecho de opción del disfrute en favor del padre, cuando ambos trabajen, siempre que la incorporación al trabajo de la madre no suponga riesgo para su salud.

ii) En todo momento, la Cooperante podrá optar por efectuar el parto en España, en cuyo caso se le abonarán los costes de repatriación.

iii) En el caso de adopción o acogimiento, se tendrá derecho a un permiso, a ejercitar por el padre o la madre, cuando ambos trabajen, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. Su duración variará según la edad del hijo adoptado, siendo de 24 semanas ininterrumpidas para los menores de 9 meses y de 9 semanas ininterrumpidas para los menores de 5 años y mayores de nueve meses.

iv) El subsidio a percibir por la Cooperante será el equivalente al 100% de la base reguladora, en las situaciones protegidas de maternidad, adopción y acogimiento, durante los periodos de descanso que por tales situaciones se disfruten.

IV. Todos los Cooperantes y las Cooperantes incluidos en el Régimen Especial menores de 65 años en la fecha del hecho causante o con 65 años cumplidos pero que no reúnan los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación del Sistema tendrán derecho a prestaciones por Incapacidad Permanente en los siguientes términos:

i) La Incapacidad Permanente Parcial para la Profesión Habitual dará lugar a una prestación consistente en una cantidad a tanto alzado equivalente al importe de 36 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal.

ii) La Incapacidad Permanente Total para la Profesión Habitual dará lugar a una pensión equivalente al 60% de la base reguladora, que habrá de incrementarse en un 20% cuando, por su edad (50 años) y falta de preparación general o especializada para



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

adaptarse a las condiciones laborales españolas, se presume la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior. No tendrán derecho al 20% de incremento los trabajadores y las trabajadoras por cuenta propia.

iii) Incapacidad Permanente Absoluta para Todo Trabajo dará lugar a una pensión equivalente al 100% de la base reguladora.

iv) Gran Invalidez dará lugar a una pensión equivalente al 100% de la base reguladora, incrementándose su cuantía en un 60% destinado a que el inválido o la inválida pueda remunerar a la persona que le atienda. Este incremento puede sustituirse por su alojamiento y cuidado a cargo de la Seguridad Social.

v) El cálculo de la base reguladora se hará de la siguiente forma para la Incapacidad Permanente Total para la Profesión Habitual:

a. Por enfermedad común, el monto resultante de dividir por el coeficiente de 1,111 el promedio mensual de los 6 meses inmediatamente anteriores al hecho causante. Si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, dichas lagunas se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento para trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años.

b. Por accidente no laboral, la base reguladora será el monto resultante al dividir por el coeficiente de 1,111 el promedio mensual de los 6 meses elegidos por el interesado dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause el derecho.

c. Por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora se calculará dividiendo por 12 el monto total obtenido del sueldo y antigüedad diarios del trabajador o trabajadora en la fecha del accidente por 365 días, más todas las pagas extraordinarias, beneficios o participación, por su importe total en el año anterior al accidente, más el cociente de dividir los pluses, retribuciones complementarias y horas extraordinarias percibidas en el año anterior al accidente, por el número de días efectivamente trabajados, al que se le habrá multiplicado por 273.

vi) El cálculo de la base reguladora se hará de la siguiente forma para la Incapacidad Permanente Absoluta para Todo Trabajo y Gran Invalidez:

a. Por enfermedad común o accidente no laboral se calculará aplicando íntegramente las reglas señaladas para la incapacidad permanente total para la profesión habitual.

b. Por contingencias profesionales, se calcula igual que la incapacidad permanente total para la profesión habitual eligiendo el interesado el mes y el año utilizados en el cálculo dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause el derecho.

V. Los Cooperantes y las Cooperantes recibirán una pensión de jubilación a partir de los 65 años de edad o antes, voluntariamente, cuando hubieren cotizado al Régimen Especial de Cooperantes, al menos, durante 30 años, en las siguientes condiciones:



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

i) La base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 160 las bases de cotización del interesado o interesada durante los 144 meses inmediatamente anteriores al hecho causante. Las bases correspondientes a los 24 meses inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante, se computarán en su valor nominal. Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el índice de precios al consumo desde los meses a que aquélla corresponda hasta el mes 25, previo al del hecho causante, a partir del cual se inicia el periodo de bases de cotización tomadas en su valor nominal. Si en el periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiera existido obligación de cotizar, las lagunas de cotización se integrarán, a los exclusivos efectos de dicho cálculo, con la base mínima de cotización, vigente en cada momento, para los trabajadores o trabajadoras mayores de 18 años. A los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia no se les integrarán las lagunas de cotización que aparezcan en la base reguladora, ni se les aplicará la posibilidad de jubilación anticipada a partir de los 30 años de cotización.

ii) El valor de la pensión será variable en función de los años de cotización a la Seguridad Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 13 años, aumentando un 4% por cada año adicional comprendido entre el décimo cuarto y el décimo octavo, un 3% a partir del décimo noveno hasta el vigésimo cuarto y un 2% a partir del vigésimo quinto hasta alcanzar el 100% a los 30 años de cotización. El período mínimo de cotización será de 13 años, de los cuales, al menos dos, deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.

VI. Los Cooperantes y las Cooperantes incluidos en el Régimen Especial tendrán derecho a la prestación sustitutiva de las rentas salariales dejadas de percibir, como consecuencia de la pérdida de empleo o de la reducción de la jornada. La duración de la prestación estará en función de los días cotizados y será la siguiente:

- Desde 360 hasta 539 días cotizados: 120 días de duración de la prestación.
- Desde 540 hasta 719 días cotizados: 180 días de duración de la prestación.
- Desde 720 hasta 899 días cotizados: 240 días de duración de la prestación.
- Desde 900 hasta 1.079 días cotizados: 300 días de duración de la prestación.
- Desde 1.080 hasta 1.259 días cotizados: 360 días de duración de la prestación.
- Desde 1.260 hasta 1.439 días cotizados: 420 días de duración de la prestación.
- Desde 1.440 hasta 1.619 días cotizados: 480 días de duración de la prestación.
- Desde 1.620 hasta 1.799 días cotizados: 540 días de duración de la prestación.
- Desde 1.800 hasta 1.979 días cotizados: 600 días de duración de la prestación.
- Desde 1.980 hasta 2.159 días cotizados: 660 días de duración de la prestación.
- Desde 2.160 días cotizados: 720 días de duración de la prestación.

La cuantía de las prestaciones será la siguiente:

- 75% de la Base Reguladora durante los 240 primeros días.
- 60% de la Base Reguladora durante el resto de la prestación.



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

La base reguladora será el promedio de las bases de cotización por desempleo de los últimos 180 días trabajados, excluidas las retribuciones percibidas en concepto de horas extraordinarias.

Los importes así calculados no podrán ser superiores al tope máximo ni inferiores al tope mínimo establecidos. El tope mínimo será de un 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) incrementado en un sexto cuando el Cooperante o la Cooperante carezca de hijos o del 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) incrementado en un sexto cuando el Cooperante o la Cooperante posea hijos o hijas. El tope máximo será de un 180% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) incrementado en un sexto cuando el Cooperante o la Cooperante carezca de hijos o hijas, del 205% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) incrementado en un sexto cuando el Cooperante o la Cooperante posea un hijo o hija, o del 230% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) incrementado en un sexto cuando el Cooperante o la Cooperante posea 2 o más hijos o hijas.

Para poder gozar de la prestación por desempleo, el Cooperante o la Cooperante deberá tener cubierto un período mínimo de cotización de 360 días a la contingencia de desempleo, dentro de los siete años anteriores a la situación legal de desempleo, o al momento en que cesó la obligación de cotizar.

La prestación se podrá solicitar en el plazo de 60 días siguientes a la situación legal de desempleo, contados a partir de la fecha de obtención de la baja consular en el país de destino.

Si se solicita fuera de plazo, el derecho nacerá a partir de la solicitud.

En condiciones a definir, cuando se haya agotado la prestación contributiva por desempleo y el Cooperante o la Cooperante exceda los 45 años y tenga responsabilidades familiares, la Administración podrá establecer un subsidio adicional por desempleo.

VII. La Administración, en el ámbito de su acción asistencial y de servicios sociales, desarrollará programas propios específicos y subvencionará a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de programas asistenciales, de formación, de reciclaje, de reinserción o de empleo a favor de los Cooperantes y las Cooperantes y de sus respectivas familias.

Asimismo, habilitará un fondo para satisfacer la totalidad de las cotizaciones al Régimen Especial de Cooperantes para aquellos y aquellas cooperantes con contratos laborales extranjeros, realizados en países receptores de ayuda. Las Representaciones Diplomáticas españolas en el exterior, a través de las Agregadurías Laborales correspondientes y a solicitud del Cooperante o de la Cooperante, habilitarán los mecanismos apropiados para el registro de los contratos laborales extranjeros y nóminas, así como para la tramitación de las altas y las bajas en la cotización ante la Seguridad Social.



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

VIII. Con carácter extraordinario, la Administración habilitará un fondo para satisfacer la totalidad de las cotizaciones al Régimen Especial de Cooperantes para aquellos y aquellas Cooperantes, que así lo soliciten, con contratos laborales no sujetos a la legalidad laboral española, realizados en países receptores de ayuda por entidades de la Administración Pública Española, de la Comisión Europea y de Naciones Unidas o por sus contrapartes locales desde el año de 1990 hasta la fecha.

IX. El período de cotización al Régimen General de la Seguridad Social efectuado por parte de los Cooperantes y las Cooperantes con anterioridad a la creación del Régimen Especial de Cooperantes se considerará como realizado a este último Régimen.

2. La Administración, en aquellos contratos laborales suscritos por las entidades contratantes españolas con Cooperantes, debidamente registrados ante los servicios competentes del Ministerio de Trabajo, reintegrará la totalidad de las cuotas patronales de la Seguridad Social satisfechas por dichas entidades contratantes en intervenciones de ayuda humanitaria o de cooperación al desarrollo no subvencionadas total o parcialmente con cargo a los recursos del Estado.

FISCALIDAD

1. Serán de aplicación a los Cooperantes y a las Cooperantes destinados por una entidad contratante al extranjero, las exoneraciones previstas en el artículo 7. apartado p) del RD Legislativo 3/2004 Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 5. del RD 1775/2004 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que sea necesaria la constitución por parte de la entidad contratante de un establecimiento permanente y con el único requisito por parte del Cooperante o de la Cooperante del registro de residente en la Embajada de España correspondiente.
2. La base imponible de los rendimientos obtenidos por los Cooperantes y las Cooperantes se determinará a partir de los salarios, pagas extras, antigüedad, complementos, beneficios o incentivos abonados por la entidad contratante, excluyendo dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia.
3. Estarán exentas del IRPF las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia satisfechas por las entidades contratantes a los Cooperantes o a las Cooperantes que participen en Actividades de Ayuda Humanitaria o en Actividades de Cooperación al Desarrollo. Serán de aplicación a los Cooperantes y a las Cooperantes destinados en el extranjero, las exoneraciones previstas en el art. 8.A.2 a) b) y 8.A.3 b) 4º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el único requisito de que el destino en el extranjero implique el cambio de la residencia habitual del personal cooperante.
4. Estarán exentas del IRPF las gratificaciones extraordinarias satisfechas por las entidades contratantes a los Cooperantes y a las Cooperantes que participen en Misiones Humanitarias.



Asociación Profesional de Cooperantes (APC)

5. Las entidades contratantes sólo estarán obligadas a retener e ingresar el 8% del exceso no exento de los Rendimientos del Trabajo obtenidos por el Cooperante o la Cooperante de salarios, pagas extras, antigüedad, complementos, beneficios o incentivos, excluyendo dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 5-2004, que contiene el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, y lo dispuesto en el Real Decreto 1776-2004 que contiene el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
6. Los Cooperantes y las Cooperantes tienen derecho al mismo tratamiento fiscal que el resto de los ciudadanos en la compra de la vivienda habitual, aunque dicha vivienda no sea habitada de manera efectiva y con carácter permanente a causa de su destino en el extranjero.

FORMACIÓN.

1. La Agencia Española de Cooperación Internacional dispondrá de un programa formativo propio en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo y de la Ayuda Humanitaria que contará con becas y ayudas de viaje y estancia con el objeto de mejorar la formación de los Cooperantes y las Cooperantes en activo y de aquellas personas que deseen iniciarse en esta profesión.

Para la implementación de este programa formativo, la Agencia Española de Cooperación Internacional podrá recabar la colaboración de Universidades y de entidades educativas, de investigación y estudio, así como de otras instituciones, empresas u organismos de carácter público o privado.

2. La Agencia Española de Cooperación Internacional fomentará, por medio de una dotación presupuestaria específica, las actividades de investigación y educativas desarrolladas por las universidades y otras entidades especializadas, en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo y de la Ayuda Humanitaria.